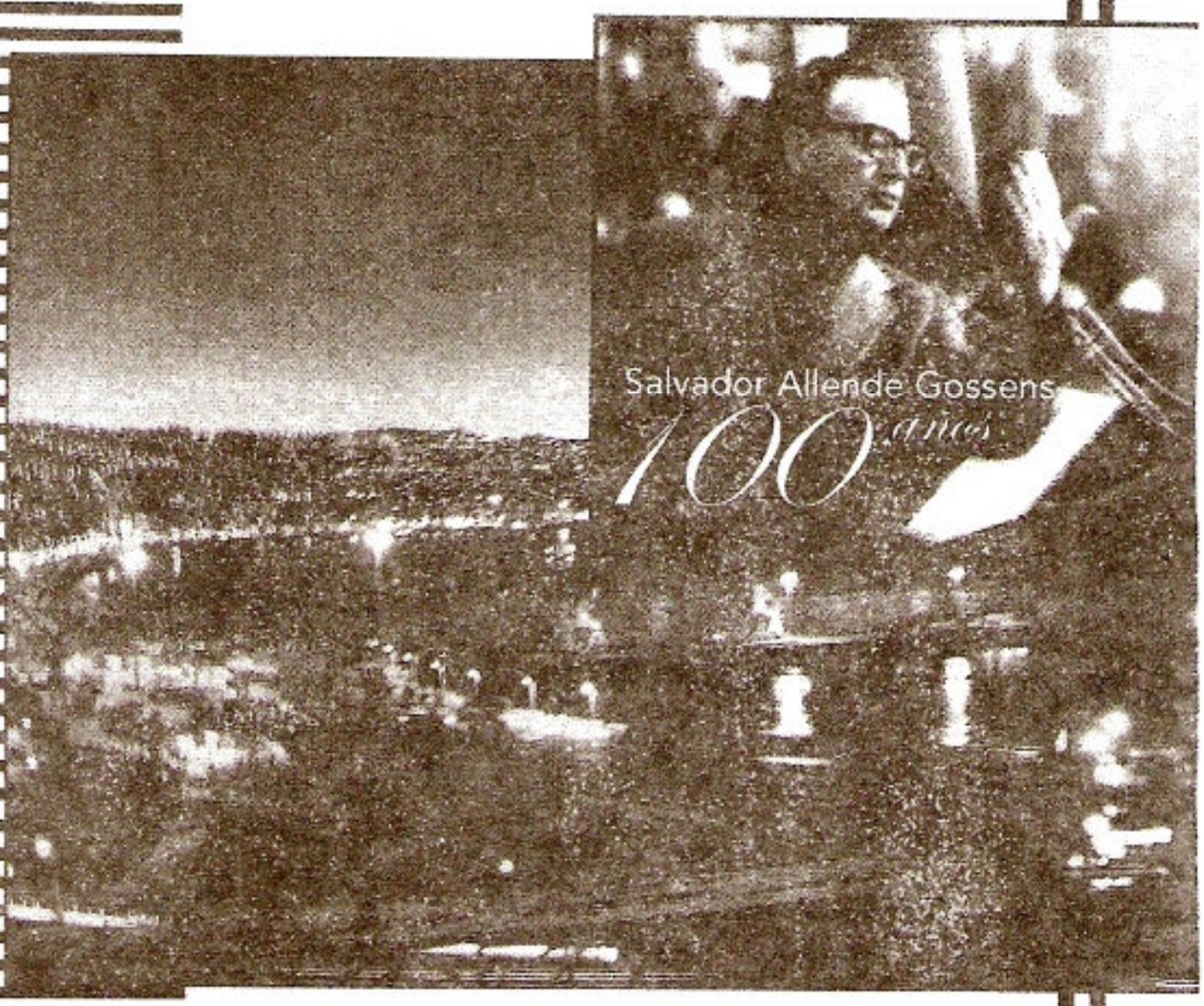


Cuadernos de Educación

Volumen trimestral
Junio 2008, Año 3 N° 7

EDITORIAL

La vida política del país en estos dos últimos meses ha estado fuertemente vinculada a la crisis que vive la educación nacional en general. Por una parte, la destitución de la Ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, generó un hecho político importante en el país, y marcó el giro hacia posiciones más neoliberales con el nombramiento de la actual ministra Mónica Jiménez de la Jara. Esta asistente social y sostenedora de colegios es manifiestamente partidaria del lucro en la educación, como lo demostró con su voto en el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, inclinándose por la moción que especifica: "ha de permitirse la existencia de entidades con fines de lucro y sin él". Se soslaya en esta frase que el lucro en la educación se realiza con recursos públicos. Además, la actual ministra, siendo rectora de la Universidad Católica de Temuco, expulsó a 26 estudiantes que habían participado en una toma. Sin duda estos antecedentes no son un buen pronóstico para el movimiento estudiantil, secundario y universitario, que en el período que se analiza ha estado generando movilizaciones de distinto tipo por las consabidas demandas que hasta aquí no han sido escuchadas.

En nuestra Quinta Región, conocidas son las movilizaciones estudiantiles de la educación superior, por mejores condiciones en el transporte escolar y por el retiro del Parlamento de la Ley General de Educación, incluyendo además demandas por la responsabilidad del Estado en la educación, por mayores niveles de

democracia universitaria, por la defensa de la educación pública y por el fin al lucro en la educación con recursos públicos. Estas movilizaciones, que incluyen paros y tomas, han alcanzado las cuatro universidades tradicionales de la región. Algunos de estos planteles han planteado exigencias específicas, como es el caso de la Universidad de Valparaíso, donde se ha dado una fuerte lucha contra la corrupción. Es importante destacar que en esta universidad se han movilizado los tres estamentos a través de las respectivas organizaciones que los representan, llegando a fortalecerse algunas de ellas en número y organización, como es el caso de la Asociación de Funcionarios Académicos, que ha visto crecer el número de profesores que participan en las asambleas convocadas.

En la capital, el movimiento "los pingüinos" ha vuelto a movilizarse, aunque no con la intensidad y volumen con que lo hiciera el año 2006, pero sin duda que esta gran variedad de movilizaciones estudiantiles es un síntoma de que algo no anda bien en nuestra sociedad. Las autoridades nacionales y locales suelen culpar a los estudiantes por estas circunstancias, ocultando la verdadera causa de estas expresiones, la cual se encuentra en el actual modelo económico y en la legislación educacional heredada de la dictadura. Ni cambios cosméticos en el modelo económico, ni tenues reformulaciones de la LOCE, producirán la anhelada tranquilidad en la educación nacional. El desarrollo del conocimiento y la tranquilidad para hacerlo requiere de cambios profundos en el modelo y la legislación, y no existiendo la voluntad de llevarlos a cabo de parte de las autoridades políticas, sólo las organizaciones sociales ligadas a la educación podrán doblegar esta falta de voluntad.

El mundo universitario esperó infructuosamente el mensaje presidencial como un calmante a la crisis de la educación superior. Lamentablemente, absolutamente nada se dijo al respecto.

La coyuntura actual de la Educación Universitaria en la Quinta Región.

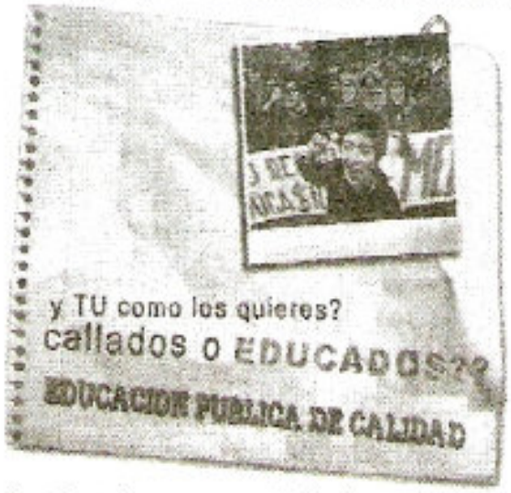
Por Raúl Fierro Pradenas

Las manifestaciones estudiantiles de la Educación Superior ocurridas a nivel nacional y en particular en nuestra Quinta Región, dejan una vez más de manifiesto la profunda crisis que vive la educación pública chilena. Desde hace casi dos meses, al menos una de las casas de estudio superiores de la región se ha encontrado en paro o toma por los estudiantes, y en una buena parte de este período, las cuatro universidades tradicionales de Valparaíso han sido, simultáneamente, escenario de movilizaciones estudiantiles. Las razones parecieran ser diferentes en cada caso, pero, en definitiva, todas conducen a que el Estado debe asumir la responsabilidad de la educación en el país y a la necesidad de una Ley de Educación que recoja y corrija todas las falencias de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, en particular, lo referido a la democratización de las universidades.

En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el conflicto duró alrededor de cinco semanas, comenzando con un paro prolongado para luego transformarse en la toma de casi todas sus unidades académicas, lo cual motivó acciones de parte de Rectoría, en orden a desalojar las dependencias ocupadas. Este desalojo no se produjo, pues no contó con la aprobación judicial. La circunstancia provocadora de la toma fue la demanda por reivindicaciones asociadas al transporte público estudiantil, e importantes, aunque insuficientes, logros parecieran haberse alcanzado al respecto. Sin embargo, estuvo también presente el cuestionamiento de la LOCE y la exigencia de retirar de la discusión parlamentaria el actual proyecto de Ley General de Educación (LGE). Los principales puntos objetados de este proyecto guardan relación con la falta de responsabilidad del Estado en la educación, el lucro en ésta con recursos públicos y la municipalización de la enseñanza. A lo anterior se deben agregar las demandas por la democratización de la Universidad, permitiendo la participación directa en el gobierno universitario de sus principales actores, a saber, académicos, estudiantes y funcionarios, quienes, constituyendo una instancia de expresión representativa, pueden colegiar la opinión de estos tres estamentos, por ejemplo, frente a situaciones anormales como las que aquí se mencionan. Al respecto, cabe señalar que el Consejo Superior de la universidad repudió por unanimidad y sin matices la ocupación de ésta. Unanimidad que no incluye a todos los estamentos, pues excluye a los estudiantes, quienes a través de su Federación y Consejo de Presidentes de Centros de Alumnos en todo momento apoyaron incondicionalmente la decisión de las bases. Se podría especular, quizás, que académicos y funcionarios estuvieron de acuerdo con la declaración del Consejo Superior, pero esto no pasa de ser

una especulación, pues ninguno de estos dos estamentos fue consultado al respecto. Todo esto es coherente con la normativa vigente, toda vez que la LOCE no contempla este tipo de consultas a los estamentos de la universidad. Por consiguiente, la opinión de este consejo sólo representa a quienes lo integran. Para ser justo, es preciso señalar que éste no se arrogó mayor representatividad de la que aquí se ha mencionado.

En la Universidad Santa María y la de Playa Ancha, el conflicto estudiantil obedeció a razones similares a las de la Universidad Católica de Valparaíso, con las diferencias naturales propias de realidades diferentes en



cada plantel, pero, en el fondo, con causas que son comunes a la vida universitaria del país y de la región en particular.

Párrafo aparte merece la compleja situación de la Universidad de Valparaíso, pues a las razones que afectan a todo el sistema universitario, se deben agregar las denuncias de corrupción declaradas por los tres estamentos. Estas acusaciones apuntan a la antigua administración, pero se sostiene que hasta aquí no se ha aclarado nada y varios de los personeros colaboradores de la anterior rectoría aún continúan en sus funciones. Esto fue suficiente para irritar a estudiantes, académicos y funcionarios. Como si esto fuera poco, se realizó una nueva elección de rector en un escenario que, tanto las respectivas organizaciones de estudiantes, como de académicos y funcionarios, aconsejaban postergar hasta aclarar las irregularidades ocurridas durante la anterior rectoría, que, por lo demás, tiene sumida las arcas de la universidad en una deuda de más de 23 mil millones de pesos. Poco antes de la elección, y con motivo de ésta, los estudiantes inciaron movilizaciones, culminando con la toma de la mayoría de los recintos universitarios. A su vez, los funcionarios de la universidad paralizaron actividades, y también lo hicieron los miembros de la Asociación de Funcionarios Académicos. Finalmente, no se recogieron las demandas de estos sectores y la elección se realizó, dicho sea de paso, de manera bastante irregular, dado que no se informó de manera apropiada el lugar de votación, se ejecutó con la universidad tomada y con la franca protesta de las organizaciones estamentales ya indicadas. El resultado, en términos generales, fue el siguiente: de un universo de 1067 académicos con derecho a voto, sufragaron 556, saliendo elegido el académico de la Escuela de Derecho Aldo Valle Acevedo con 341 votos. Hubo 73 votos nulos y 9 votos blancos. Otros dos candidatos a la elección resultaron con 71 y 62 votos, respectivamente. El profesor Valle obtuvo el 61% de los votos emitidos, y la votación válidamente emitida, descontando nulos y blancos, alcanzó el 44%, muy por debajo del porcentaje histórico en una votación de rector en esta universidad. La diferencia entre el porcentaje de votación histórico y el aquí indicado, obedece a votantes que no fueron informados de la fecha y lugar de votación, otros que no votaron por el carácter conflictivo de esta elección, y un tercer grupo correspondiente a quienes no votaron por considerar ilegítima la realización de este evento en las circunstancias ya señaladas. Es obvio que la legitimidad de esta elección esté cuestionada.

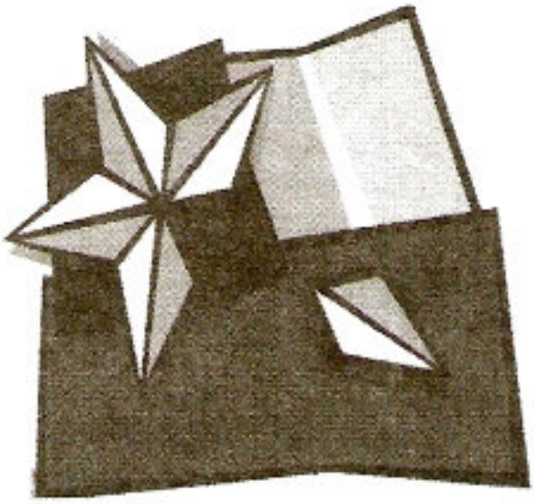
Es posible que esta elección sea impugnada, o bien que el rector electo asuma funciones como tal. Pero esto ha significado un retroceso para los académicos que se manifiestan en defensa de la Educación Pública, por la democratización de la Universidad y, en general, por la derogación

del contenido en la LOCE. La razón de lo señalado proviene de la división entre los que legitiman y los que no, esta elección de rector. Esta división sin duda quita fuerza al cuestionamiento más profundo de las causas de la crisis de la Universidad de Valparaíso. Principalmente, han sido los estudiantes quienes han planteado demandas que van más allá del cuestionamiento de la elección. Este estamento estableció un petitorio de cuatro puntos, consistente en: 1) aclaración de la situación de la universidad mediante una auditoría externa, 2) elecciones triestamentales, 3) elaboración de nuevos estatutos orgánicos para la universidad con la participación de los tres estamentos, y 4) compromiso económico del Estado con la universidad en crisis, por el carácter estatal de ésta. Los otros dos estamentos, académicos y funcionarios, aunque con énfasis distintos, también plantean demandas similares. Sin desmerecer las críticas a la legislación en educación, sin duda el objetivo común de los tres estamentos de esta universidad es salvar del derrumbe esta institución, para lo cual se demanda la participación estatal y se permanece en estado de alerta ante posibles soluciones neoliberales, que junto con mermar la calidad de la universidad como desarrollo del conocimiento, se acompañan de una serie de despidos que incrementan el conocido drama que vive nuestra sociedad.

Opiniones un tanto suspicaces señalan la intención de hacer sucumbir estas instituciones públicas con el propósito de que manos privadas les tiendan una mano y así el Estado pueda desligarse definitivamente de esta responsabilidad. Independientemente del valor de verdad de esta afirmación, serán los estamentos universitarios quienes, encontrándose exigidos al máximo en la toma acertada de acciones y decisiones, conduzcan el movimiento hacia la solución definitiva de la crisis que vive la educación superior en nuestro país.

La herencia ideológica de la dictadura.

Por Osvaldo Fernández Díaz



¿Nos pudimos liberar de la sombra de la noche con el triunfo del "no" en el plebiscito de 1989? ¿Nos hemos liberado del lastre del "pinochetismo" con su muerte en impunidad? A medida que conocemos lo que ocurrió, sus trágicas consecuencias, y cuánto de su obra aplasta aun a Chile, nos vemos forzados a responder negativamente a estas preguntas. Desapareció el gato, pero quedó su siniestra sonrisa. No se creyó cuando, a unos años de la dictadura, se dijo que en Chile no había todavía democracia. Cierto, comparadas las cosas, el régimen político que le sucedió era lo más parecido a una democracia. Pero, miradas las cosas desde

otro plano, si bien con el término del régimen dictatorial se logró salir de la situación de una "democracia tutelada", o acuartelada, se pasó, sin embargo a soportar una verdadera tutela ideológica: imposición de una hegemonía cultural que se había venido incubando durante aquellos diez y siete años de gobierno militar. Lejos de desaparecer o aminorarse, aquella imposición ha pasado ahora a instalarse plenamente, como la ideología dominante de Chile, desde los primeros gobiernos de la Concertación.

I

En los años cincuenta del siglo pasado el modelo de sustitución de exportaciones se hallaba agotado, y en el plano de la política general se disputaban la sucesión tres proyectos. En primer lugar, una nueva izquierda que comenzaba a diseñarse junto a la figura de Salvador Allende, creando una nueva alianza que logró expresarse durante los mil días de la Unidad Popular. Otro de los modelos en disputa era el que propugnaban las fuerzas demócratacristianas, que irrumpían con gran ímpetu en la escena política nacional a través de un modelo desarrollista que llevaría a la práctica el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1964. Y por último, un modelo de derecha todavía en ciernes, no totalmente coherente, que sólo se haría nítido durante la dictadura militar. En su conjunto, en el plano político, Chile era un espacio abierto.

En lo que respecta a su comportamiento, la derecha, si seguimos las ideas de Leopoldo Benavides, se encontraba más bien a la defensiva, hasta poco antes de la Unidad Popular. Es con la creación del Partido Nacional que la derecha chilena comienza realmente a elaborar un proyecto de más largo alcance. Se puede afirmar que hasta los 70 le faltaba capacidad de dirección en el plano que Antonio Gramsci llama "intelectual y moral". De ahí que su mayor triunfo sea hoy día el haber creado esa capacidad de dirección, que en lo intelectual y moral ha calado profundamente en la sociedad chilena. Aunque los chilenos no voten mayoritariamente por ella, siguen y han hecho suyos muchos de sus preceptos. En general, se puede afirmar que fue gracias a la dictadura y con su apoyo que se pudo modificar la cultura y las estructuras intelectuales hasta entonces vigentes. Por eso se puede decir que la profundidad de la administración intelectual, en términos de conformismo, que ha creado la derecha en Chile es hoy día uno de los desafíos más serios que enfrenta la izquierda.

Si nos atenemos al plano económico y social esta hegemonía cultural es, hoy en día, después de cuatro gobiernos de la Concertación, aún mayor. Por una parte, por la sólida instalación de poderes fácticos, en especial el económico, que está en manos del empresariado chileno. Este poder fáctico se halla reforzado por la hegemonía del modelo neoliberal. La Concertación, que adhiere y se atiene al modelo de la manera más ortodoxa posible, ha pasado a convertirse en una simple administradora y garante del éxito del programa económico del neoliberalismo. Fue en Chile en donde este modelo se experimentó por primera vez y es aquí en donde se sigue aplicando al pie de la letra. Pero no se trata tan sólo de programas políticos que se aplican "desde arriba". Lo más grave para la izquierda reside en que el neoliberalismo se ha hecho carne en las masas. El consumo y el crédito para el consumo, más la forma de vida que generan, han ganado a los más amplios y humildes sectores y ha pasado a constituir una norma cotidiana de conducta, que constituye el sostén básico y esencial para la gobernabilidad.

En el plano político es importante destacar que la UDI junto con RN representan casi la mitad del electorado nacional. Su hegemonía se sustenta, por una parte, en el poder fáctico de los empresarios, por otra, en la forma pactada como se logró un resquicio democrático luego del triunfo del "No", pero principalmente por la fuerza que ha cobrado el dominio ideológico. Se ha ido

produciendo, entonces, pero para el lado de la derecha, lo que Antonio Gramsci había propuesto como proceso de instalación de una hegemonía, diciendo que ésta supone a la clase hegemónica como dominante y dirigente a la vez. Partiendo del hecho que en el arco político de una sociedad como la nuestra se consideran las perspectivas de una alianza sobre la base de que hay, en ese arco, amigos, aliados, adversarios y enemigos, entonces una adecuada política de alianzas debe tratar de fortalecer el campo de los amigos, incorporando en él a los aliados; debe neutralizar y, si es posible, como ha ocurrido en Chile, fagocitar a los adversarios, para poder lograr la meta: reducir el campo de los enemigos a su mínima expresión. Si observamos la situación política chilena, vemos que para la derecha este programa aparece casi cumplido, y lo sería cabalmente, si no fuera porque desde el fin de la dictadura ha habido cuatro gobiernos de la concertación, lo que significa que en el plano estrictamente político la derecha no ha logrado todavía la alternancia. Esto nos lleva a que tenemos, de un lado, la alianza conservadora con la UDI y sus aliados de Renovación nacional, y del otro, la Concertación que podríamos describir como adversarios neutralizados de la derecha, y una izquierda seriamente disminuida -si tomamos en cuenta la tradición chilena- y que sólo en estos últimos años empieza a remontar.

II

El primer acto fundacional del golpe de estado de 1973 fue el quiebre institucional, la supresión violenta, no sólo de lo que había sido la práctica política de los años del Frente Popular, sino de lo que era institucional desde mucho antes. Se persigue, se relega y asesina a la clase dirigente política; algo similar ocurre con los trabajadores, con lo cual se busca acabar con la capacidad negociadora de la clase obrera. En fin, se siguen rigurosamente los dictados de la Doctrina de la Seguridad Nacional que se había estudiado en las escuelas de adiestramiento militar de los EEUU. El terror de Estado que se aplica es igualmente consecuente con esta misma doctrina, que hablaba de un enemigo interno. No se piensa todavía mucho hacia delante, y a pesar que Jaime Guzmán fue encargado de trabajar con un equipo, desde los primeros días, en una nueva Constitución, todo el primer afán de la Junta estuvo destinado a borrar la cultura política democrática y cívica a que los chilenos se habían acostumbrado desde el fin del gobierno de Ibáñez. Esta depuración llevada a cabo con prolijidad y saña dura hasta pasado el año 1975.

Casi inmediatamente después del golpe, tres sectores concurrieron como protagonistas a darle cuerpo a una doctrina, y a lo que después sería un proyecto de gobierno: los militares, los gremialistas, y los flamantes economistas que volvían de la Universidad de Chicago. Esto comienza cuando la coincidencia y compromiso entre estos tres sectores se anudan en una densa trama (la trenza). Así, los militares que adherían a la una concepción ideológica que se desprende y sustenta de la idea de la guerra fría, y que aporta el autoritarismo y la práctica del mando unipersonal, se vinculan con aquellos jóvenes economistas que se habían formado en la Universidad de Chicago y que, pese a sus diferencias, optaban por la economía de mercado y el neoliberalismo. A ellos se unen también desde los primeros momentos los gremialistas liderados por Jaime Guzmán, quienes impregnan el todo con un componente católico extremo e integrista.

Estas ideas, que lograron tomar un cuerpo definitivo desde la aprobación de la

Constitución de 1980, se habían venido entrelazando en torno a un núcleo central que era la economía de mercado. Algunas de las ideas integrantes de este cuerpo existían de antes en estos tres sectores. Por ejemplo, la idea de que el Estado sólo tenga un papel subsidiario, era uno de los componentes básicos del gremialismo y justificaba también la intervención militar en política. Otra idea común y que funcionaba ya en cada uno de los tres sectores era el "apoliticismo". El movimiento gremialista se crea en 1965 y «nace como respuesta a la politización de la Universidad en Chile, y a la radicalización de las posturas que se dieron en los períodos de Frei y Allende (2).

Todo se precipita cuando el golpe de Estado de 1973 da origen directamente el gobierno de la dictadura militar. Si bien este bloque inicial de poder ha venido progresivamente desmaterializándose con respecto a su contextura inicial, con la salida del poder político de Pinochet y la paulatina reconversión de las FFAA chilenas, persiste, sin embargo, en comportamientos de administración como el mando unipersonal. En ocasiones esta persistencia se advierte en la fuerza que adquiere la represión, y la colusión constante entre el empresariado y las fuerzas políticas de derecha.

El gremialismo es el verdadero germen de la postura ideológica actual de la derecha chilena, que en los momentos iniciales entronca con la dictadura y le otorga un sentido político ideológico, de más futuro que la doctrina de la seguridad nacional. Su participación como asesor en el gobierno de la Junta militar apadrina «políticamente el proyecto económico de los Chicago Boys, dotándolo de coherencia política y calzándolo con el nuevo proyecto que se vislumbraba para Chile(3). Junto con participar en la preparación de la que sería la Constitución de los 80, es el autor de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile. Continúa posteriormente en la década de los ochenta, más concretamente el 24 de septiembre de 1983, cuando se crea la Unión Democrática Independiente (UDI), cuyo primer comité directivo fue presidido por Jaime Guzmán.

Algunos años más tarde, como preparación para el plebiscito en 1988, la derecha se une como Renovación Nacional. A dicho conglomerado concurren excedentes del Partido Nacional presidido por Andrés Allamand, la UDI, y el Frente Nacional del Trabajo, presidido por Sergio Onofre Jarpa. Fue el primer partido político inscrito a nivel nacional desde el receso político de 1973. Fue durante el gobierno de la Junta militar, que estos distintos protagonistas de la dictadura y sus compañeros de ruta se fueron entendiendo y, si podemos decirlo así, la trenza comenzó a tomar cuerpo y consistencia.

De tal manera que es una trama ideológico-cultural de derecha la que cubre la actual democracia en Chile, empezando por el hecho que estamos hablando de una democracia que fue pactada, y que la totalidad de los detalles que se refieren a los compromisos pactados no se conocen aún plenamente. Esta situación confiere internamente a nuestra sociedad un sesgo ideológico que es reaccionario hasta en los actos más cotidianos. Lo que lleva a una situación que en materia de derechos, de libertad y de reconocimiento, ha retrocedido hasta el panorama que existía antes del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ya que la Constitución de los años 1980 fue un evidente retroceso con respecto a aquella del año 1925. Importantes movimientos laborales, de los pueblos originarios, de las mujeres, de los estudiantes universitarios, de la salud y la educación, constatan en sus luchas diarias este retroceso en la dignidad y el reconocimiento. Y no hablamos sólo de una atmósfera cultural, que impone hábitos y costumbres, sino particularmente de su reproducción y reorganización a través del funcionamiento actual de los aparatos ideológicos de Estado. Es a este lastre ideológico al que nos referimos cuando se escucha decir que el carácter público de la institución estatal ya no está a la orden del día, que son ideas nostálgicas. Ideas que

siguen a una situación de facto que se instaló desde el mismo instante en que los componentes tradicionales de la sociedad chilena, que antes eran públicos, tales como la salud, la previsión y la educación, dejaron de serlo, fueron privatizados, e incluso, han pasado a ser regidos por las leyes y normas del mercado.

NOTAS

(1) Este trabajo ha sido inspirado por la lectura de los libros de María Olivia Mönckeberg, en especial *"La privatización de las Universidades. Una historia de dinero, poder e influencias"*, editorial Copa rota, Santiago de Chile, 2005.

(2) Moncada Durruti, Belén, *Jaime Guzmán, el político*, RIL editores, Santiago de Chile, 2006, p.41.

(3) Idem, p.73

CENTENARIO DE SALVADOR ALLENDE (Segunda Parte)

El gobierno Popular (1970 - 1973)

Por Ricardo López

Semanas antes del 4 de septiembre de 1970 se podía visualizar el carácter que tendría el Gobierno de Salvador Allende: desde cualquier cerro de Valparaíso, y ya de noche, eran visibles los cientos de miles de luccecitas rojas que competían a la par con las blancas y amarillas de las casas y alumbrado público que siempre han caracterizado a nuestro puerto principal. Eran las señales luminosas que miles de comités de partidarios de la Unidad Popular habían preparado y encendido durante los meses de campaña con el símbolo de la UP. Estos comités estaban integrados mayoritariamente por trabajadores, pobladores, estudiantes y dueñas de casa, que estaban marcando un hecho inédito en la política chilena: la derecha todavía pretendía escamotear el triunfo al pueblo, pero esta vez no podría, había un pueblo movilizado y unido tras un gran objetivo: conquistar el poder político para transformar a Chile en una

patria más justa, democrática, participativa e independiente.

La participación popular.

Si se necesitara establecer una sola característica del gobierno popular, esta necesariamente sería la de la participación popular. Todo se hizo con el pueblo organizado y nada sin él. Nada de comisiones de "expertos", ni de consejos de "sabios", tampoco de acuerdos trasnochados en el Congreso para "consensuar" cambios que no cambiaran nada. El Gobierno Popular dio, desde el primer día de asumido el poder, señales claras y potentes respecto de la forma de gobernar que utilizaría Salvador Allende y la Unidad Popular.

El Programa de Gobierno había sido elaborado y ofrecido al pueblo para ser implementado, no para ser negociado y puesto en práctica en la "medida de lo posible", por ello el primer gabinete ya incluía a cuatro obreros: Américo Zorrilla en Hacienda, Carlos Cortés en Vivienda, José Oyarce en Trabajo y Pascual Barraza en OO.PP.

Salvador Allende lo dijo muchas veces en campaña: se iba a poner en el primer lugar a los trabajadores y así se hizo.

La CUT se integró en todos los niveles de decisión, de ese modo las remuneraciones, jubilaciones, pensiones y montepíos fueron siendo mejoradas como nunca antes en la historia económica del país, muchos de estos reajustes se financiaron con cargo a utilidades excesivas de los empresarios y no a través de impuestos regresivos, como aumentar el IVA, que tanto gustan de aplicar los economistas neoliberales.

El salario mínimo real creció un 300% respecto del nivel de 1968, la asignación familiar de los obreros, empleados públicos y campesinos se acercó a la de los empleados particulares, de tal forma que en 1973 se podía comprar 39 kilos de pan con ella(la dictadura no tardó mucho en reducirla a 6 kilos y luego hacerla desaparecer).

La juventud chilena fue y se sintió protagonista de la historia y jugó un rol decisivo en el avance de las conquistas populares, su participación se canalizó a través del Consejo Nacional de la Juventud, que sería el encargado de promover la organización y de resolver los problemas de los jóvenes. De las inquietudes juveniles surgieron grandes iniciativas culturales que aún hoy permean nuestra sociedad: Editorial Quimantú y el sello DICAP.

En el mundo campesino el nivel de organización creció un 168% respecto de 1969, con un total de 278.000 campesinos sindicalizados.

Los comerciantes, pequeños empresarios, transportistas, artesanos y todo tipo de trabajadores independientes vieron cumplido uno de sus mayores anhelos: la creación de la Caja de Previsión Social. (Ley 17.392 que la dictadura hizo desaparecer)

Los cambios comenzaron a ocurrir en todos los aspectos de la vida del pueblo. La Salud pasó a tener una preocupación prioritaria, los consultorios comenzaron a atender día y noche, creciendo las atenciones en un 32,2% en el primer año. La Universidad de Chile abrió carreras vespertinas de médicos y enfermeras, aumentó el número de dentistas (31,5%), se capacitó a 3000 trabajadores para participar en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. En 1972 el gasto en salud fue de 3,5% del presupuesto nacional, en tanto que durante la dictadura bajó a 0,6%.

En Educación se reafirmó la gratuidad de la matrícula en la enseñanza básica y media, y en las Universidades miles de estudiantes quedaron exentos de cancelar aranceles, en tanto aquellos que debían hacerlo cancelaban sumas modestas dependiendo del sueldo de sus padres. En 1972, el gasto en educación fue de 7,2% del PIB, más del doble del actual. Se creó el Programa Experimental de nivelación básica para obreros, permitiendo que miles de trabajadores accedieran a la enseñanza media y carreras tecnológicas. El convenio CUT-

Universidad Técnica del Estado (hoy USACH) desarrolló un sistema nacional de educación superior que llevó a las Universidades a las fábricas, al campo, las minas y los puertos haciendo posible que trabajadores que alcanzaran el grado de Técnico Universitario pudieran cursar estudios de Ingeniería.

El Gobierno de Salvador Allende dio un impulso extraordinario a la cultura colocando al alcance del pueblo más de 12 millones de ejemplares de la literatura nacional y universal (por primera vez Subterra estuvo en las casas de Lota), a través del convenio CUT-UTE el Teatro Nuevo Popular recorrió el país realizando funciones en fábricas, asentamientos agrarios y poblaciones, el movimiento musical y pictórico alcanzó niveles de excelencia que luego la dictadura transformaría en "apagón cultural" (apagón que aún persiste).

Las mujeres y los niños también fueron el centro de atención preferente, el medio litro de leche diario para cada niño fue una de las primeras 40 medidas aplicadas, llegando a distribuirse gratuitamente 49 millones de litros de leche en 1973. Se crearon cerca de 400 jardines infantiles gratuitos para atender a 70.000 niños. Se igualó el salario mínimo industrial para hombres y mujeres, el proyecto que creaba el Ministerio de la Familia se convirtió en Ley pocos días antes del golpe militar, la dictadura no lo promulgó.

A comienzos del Gobierno Popular había un déficit de 480.000 viviendas, cifra que se elevó a 520.000 con el terremoto de Julio de 1971 que afectó principalmente a la Quinta Región. En los tres años se logró un aumento promedio anual de 8% en la construcción de viviendas, se fijó por ley un tope máximo de 20% del salario para el pago de dividendos de viviendas de menos de 90 metros cuadrados y se derogó la reajustabilidad de los dividendos. Las viviendas levantadas en esos años pueden ser apreciadas a lo largo de Chile, y habiendo transcurrido 35 años, la calidad las distingue de las indignas viviendas sociales construidas en dictadura y con los negociados de concertacionistas neoliberales.

El Gobierno de Salvador Allende cambió a Chile, cambió a su gente, por primera vez los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, participaban en la construcción de una nueva sociedad, en donde las medidas económicas redistributivas tenían un efecto claro y concreto en el nivel de vida de los postergados, de los excluidos. Pero esto se hacía con cargo a las utilidades de la minoría explotadora y de los que se habían adueñado de nuestras riquezas naturales: la oligarquía nacional y el imperialismo.

Estos sectores, que desde un comienzo hicieron todo por evitar que se instalara el Gobierno Popular, al darse cuenta que la usurpación, introducida en otro tiempo sin razón, se hacía visible para la sociedad chilena y ya no podía mostrarse como razonable, auténtica ni menos eterna, apresuraron sus planes para evitar que el proceso en curso se asentara y desarrollara exitosamente.

Un pueblo más libre, más culto, más organizado, más alegre, más solidario, más participativo no es parte de la fórmula que permite altas tasas de acumulación de ganancias, todo lo contrario.

Las grandes transformaciones.

El Programa de Gobierno de la Unidad Popular se proponía como principal objetivo el terminar con la pobreza, el atraso y las desigualdades sociales ,y por ello, además de las medidas iniciales, era necesario sentar las bases de una nueva economía que permitiera continuar con el proceso redistributivo.

El conjunto de grandes transformaciones le dieron el carácter revolucionario al Gobierno Popular, se hacía necesario recuperar las riquezas básicas del país, controlar el crédito, el comercio internacional y realizar una profunda reforma agraria.

La nacionalización del cobre fue la primera de estas transformaciones, el proyecto respectivo fue enviado al Parlamento con la firma de Salvador Allende y el ministro de minería, el radical Orlando Cantuarias. Dicho proyecto se transformó en una Reforma Constitucional. El proyecto se presentó el 22 de diciembre de 1970, siendo aprobado en abril de 1971 por una amplia mayoría en la Cámara y en el Senado. Finalmente, el 16 de julio de 1971 fue aprobado en forma unánime en sesión del Congreso Pleno; la contundencia de los argumentos a favor de recuperar esta riqueza para todo el pueblo chileno y la movilización permanente de los trabajadores incidieron en que la derecha de entonces no se atreviera a oponerse a esta patriótica exigencia.

La nacionalización consultaba el pago de indemnizaciones, pero deduciendo de dicho pago las rentabilidades excesivas que hubiesen obtenido las empresas extranjeras en años anteriores. Esto significó que el único pago se hiciese a la Compañía Minera Andina por US$ 4.800.000, el resto de las empresas que controlaban Chuquicamata, El Salvador y El Teniente no recibieron ni un sólo peso de indemnización, puesto que sus utilidades habían excedido en demasía el margen de 12% de rentabilidad que la Ley había establecido.

Salvador Allende explicó esta situación en la Asamblea General de las Naciones Unidas detallando que la Anaconda Company había obtenido un promedio de utilidad de 21,3% anual sobre su valor libro, en el período 1955-1970, en tanto que las utilidades de Anaconda alcanzaban sólo un 3,6% en otros países. La situación de la Kennecott Copper Corporation era aún más lesiva al interés nacional, pues en el mismo período había obtenido un promedio de 52% anual, llegando a obtener un 200% en 1969.

Estas mismas empresas extranjeras manipularon por décadas el precio del cobre, y durante la segunda guerra mundial se las arreglaron para mantener el precio en 11,5 centavos de dólar la libra de cobre, luego, durante la guerra de Corea, lo mantuvieron en 24,5 centavos la libra y durante la guerra de Vietnam entregaron a EE.UU. 60.000 toneladas de cobre como reserva estratégica al precio vil de 36 centavos la libra, en circunstancias que el precio del metal en la Bolsa de Londres era de 60 centavos, provocando una pérdida para nuestro país superior a los 50 millones de dólares.

La nacionalización de las grandes minas de cobre puso fin al saqueo imperialista y contribuyó poderosamente a financiar los gastos del estado.

La dictadura de Pinochet hizo trizas la nacionalización de las riquezas básicas: sin desnacionalizar Codelco, permitió la explotación de nuevos yacimientos a privados, que en la actualidad completan el 66% de la extracción de cobre de suelo chileno, le regaló una indemnización de 500 millones de dólares a las empresas expropiadas y estableció el pago del 10% de las ventas de cobre para implementar un fondo reservado de las FF.AA., obligación que rige sólo para Codelco y no para las privadas.

En los 18 años de gobiernos concertacionistas nada se ha hecho para revertir la enorme traición a la patria perpetrada por Pinochet y sus secuaces.

La reforma agraria era una de las transformaciones más necesarias y apremiantes que imponía la realidad del país, en el decenio 1955-1965 la producción agrícola había disminuido en los rubros más

importantes: la de trigo había bajado de 164 a 146 kilos por habitante, la de arroz de 13.6 a 9,5 kilos, la de papas de 102 a 78 kilos, la de porotos de 11,7 a 9.5 kilos, la de leche de 101 a 94 litros y la de carnes de 30 a 20 kilos per cápita.

El proceso de reforma agraria fue iniciado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva quien llegó a expropiar 3 millones 557 mil hectáreas en tres años y diez meses, y el gobierno de Salvador Allende puso fin al latifundio expropiando 5 millones 355 mil 223 hectáreas. La supresión de la propiedad latifundista y su reemplazo por la de los propios trabajadores agrícolas llegó a beneficiar a 70 mil familias campesinas.
Durante el período 1971-1973 se alcanzó la mayor cantidad de hectáreas sembradas de toda la historia del país, la producción agrícola llegó a crecer en un 26,7%.

La cuestión agraria es lo más complejo en todo proceso revolucionario, pues además del apoyo del campesinado se requiere disponer de semillas en calidad y cantidad apropiadas, de maquinaria agrícola, de sistemas de silos y bodegas, de transporte apropiado, de capacidad suficiente de carga y descarga en puertos, de cadena de frío, de una adecuada política crediticia, de investigación tecnológica de punta y de educación técnica de los trabajadores del campo.

Para concretar lo anterior era básico contar con un campesinado organizado; en 1962 los campesinos organizados en sindicatos no eran más de 5 mil, en 1969, con la reforma en marcha, los campesinos sindicados eran 104 mil 700 afiliados, a finales del gobierno popular los campesinos sindicalizados eran 300 mil.

Desde los inicios el proceso de reforma agraria fue constantemente saboteado por los latifundistas y la clase oligarca. Heridos de muerte por esta reforma utilizaron todo en contra de este proceso: amenazas, sabotaje, organizaron bandas para estimular el mercado negro, y para esto tuvieron generosa ayuda del gobierno estadounidense. En esto tuvieron éxito, así es como el mismo 12 de septiembre miles de productos acaparados por el mercado negro y comerciantes facinerosos salieron al mercado, demostrando de paso que la escasez no se debía a bajas de la producción agrícola, sino al criminal acaparamiento que indujeron estos oligarcas y latifundistas.

Pinochet se empeñó desde el primer día en revertir el proceso, dejando nulas todas las expropiaciones con trámites legales pendientes. Formó comisiones liquidadoras de cooperativas y puso en venta a las mayores, generando pingües ganancias a nuevos ricachones, entre ellos a Julio Ponce Lerou (su yerno).

A pesar del empeño del dictador, el latifundio semifeudal no se pudo reconstruir y la agricultura chilena entró en una fase de modernización del tipo capitalista, por ello hoy no encontramos inquilinaje, pero sí trabajadores temporeros que son explotados salvajemente por grandes capitalistas neoliberales nacionales y extranjeros.

Las tres áreas de propiedad conformaban uno de los principales aspectos del programa de gobierno, se establecería un área de propiedad social constituida por las empresas que ya eran del estado y por las empresas privadas industriales de tipo monopólico. Transcurrido un año y medio de gobierno el 50% de estas empresas fueron estatizadas, llegando a representar este sector un 40% de la producción.

También, a esa fecha, se había estatizado el comercio mayorista, el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.

Otra área de propiedad era la mixta, constituida por empresas medianas o grandes que serían, por voluntad común, de propiedad de privados en asociación con el estado.

El área de propiedad privada estaría conformada por fábricas de pequeños y medianos empresarios, los talleres de artesanos y las tierras, máquinas y ganado de los pequeños y medianos agricultores.

Un elemento económico importante del área de propiedad social era el sistema financiero: a fines de 1970 Allende comunicó al país del envío al Congreso de un proyecto de Ley que permitiera nacionalizar la banca privada. Junto con esto abrió un poder cobrador de acciones de los bancos, los accionistas vendieron sus títulos con tal rapidez que a mediados de 1971 el estado controlaba 16 de los 18 bancos privados.

La nacionalización de la banca trajo aparejados varios beneficios para el país y sus trabajadores, se redujo sustancialmente la tasa máxima de interés (de 24% a 18%), se establecieron tasas preferenciales para ciertas actividades económicas (12% para actividades agrícolas), se promovió el crédito a favor de los pequeñas y medianas empresas, se descentralizó el mismo para favorecer a las provincias. Se suprimieron imposiciones humillantes para los trabajadores bancarios, como la necesidad de pedir permiso para casarse y el término del contrato para mujeres que se casaban y la imposición de aval económico para ser contratada.

Huelga decir que la dictadura borró de un plumazo las tres áreas de propiedad, devolviendo empresas y bancos al sector privado, proceso que se realizó de la forma más espuria y poco transparente que era posible. Al calor de este proceso de desnacionalización de la economía surgieron nuevos grupos económicos y ricachones comprometidos con la dictadura militar (Ponce Lerou, Yuraszeck, entre otros).

La Concertación, que en el programa del primer gobierno (Aylwin) ofreció al país la revisión de todas las privatizaciones efectuadas por Pinochet, no ha cumplido su palabra hasta hoy.

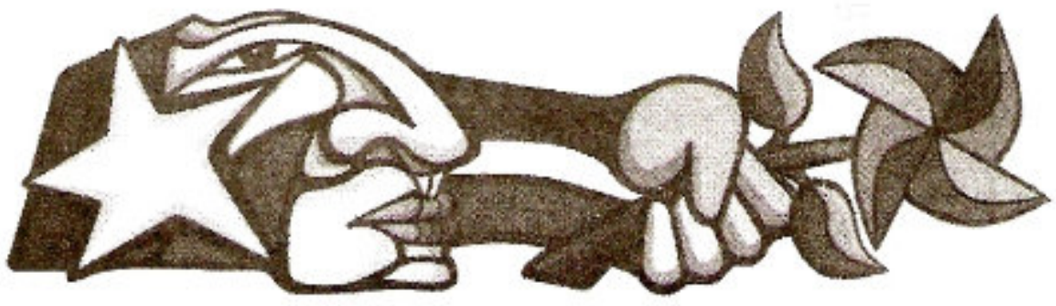
El Chile que hoy tenemos, que en lo económico es gobernado por la ortodoxia neoliberal, en lo social por la asistencialidad precaria sin ninguna participación de los trabajadores, en lo educacional por el lucro privado, en lo cultural por la felonía farandulesca, en sus relaciones internacionales por la sumisión ante el imperio, hace que las conquistas del pueblo obtenidas durante el gobierno de Salvador Allende tengan una vigencia como nunca antes, es preciso que los movimientos sociales y políticos excluidos caminen en la senda de una nueva mayoría que permita acceder a un gobierno de nuevo tipo, que en su programa de gobierno incluya la reconquista de los avances logrados: trabajo decente, vivienda digna, educación pública de calidad, salud pública eficiente, transporte colectivo público, nacionalización de las riquezas del país, independencia y dignidad nacional para decidir nuestro propio camino de desarrollo.

Bibliografía:

El Gobierno de Salvador Allende, Luis Corvalán Lepe, Ediciones LOM

La obra de gobierno de Salvador Allende, Aníbal Palma, www.salvador-allende.cl

El Gobierno del Presidente Salvador Allende, Gonzalo Martner.



Salvador Allende
100 años

En esta edición:

Editorial *pág 2*

La coyuntura actual de la Educación Universitaria en la Quinta Región

Raúl Fierro Pradenas *pág 4*

La herencia ideológica de la dictadura.

Osvaldo Fernández Díaz *pág 6*

El Gobierno Popular (1970 - 1973)

Ricardo López *pág 10*

Escribanos:

Contacto: cuadernosdeeducacion@gmail.com

Salvador Allende
100 años